

Causa RUC 2100631578-7 / RIT 77-2023

Delitos imputados: tráfico de drogas y asociación para cometer estos delitos.

Acusados:

1. **Yimmy Arango Leiton**, RUN 25272574-1, colombiano, 47 años, soltero, taxista, domiciliado en calle El Carmen 187, depto. 302 comuna de Santiago.
2. **César Augusto Bolaño Calderón**, RUN 14882696-K, colombiano, 48 años, domiciliado en calle Rey Alberto 1181, depto. 101, San Miguel.
3. **Francisco Alfonso Vélez Feijó**, RUN 14888085-9, 53 años, casado, comerciante, domiciliado en Serrano 62, depto. 801, comuna de Santiago.
4. **Carlos Arturo Buitrago Ocampo**, RUN 14882695-1, colombiano, 61 años, viudo, confeccionista, domiciliado en calle Carmen 187, depto. 309, comuna de Santiago.
5. **Alexis Ávila Londoño**, RUN 24437842-0, colombiano, 38 años, soltero, comerciante, domiciliado en calle Hermanos Amunátegui 725, depto. 916, comuna de Santiago.
6. **Leiber Johan Ocampo Ordoñez**, RUN 14882698-6, colombiano, 33 años, soltero, chofer, domiciliado en calle Colombia 426, comuna de Pudahuel.
7. **Rafael Andrés Villegas Pulido**, RUN 14882697-8, colombiano, 43 años, casado, administrador de empresas, domiciliado en calle Avda. Vicuña Mackenna 1905, comuna de San Joaquín.
8. **Daniel Llanos Rojas**, RUN 24974613-4, colombiano, 59 años, soltero, conductor profesional, domiciliado en calle Tacna 3461, comuna de Estación Central.
9. **Wilmer Patiño Neira**, RUN 14882693-5, colombiano, 44 años, casado, comerciante, domiciliado en calle San Isidro 447, depto. 802, comuna de Santiago.
10. **Jhon Wilmar Patiño Lozano**, RUN 14882694-3, colombiano, 25 años, jornal, soltero, domiciliado en calle Lago Pinto 1758, comuna de Puerto Natales.

Fiscal Maximiliano Krause Leyton.

Defensas:

1. Matías García Muñoz, defensor penal público por Buitrago Ocampo, Arango Leiton y Llanos Rojas.
2. Paula Orellana y Nelson Saavedra por Vélez Feijó.
3. Javier Cruz Barría por Ávila Londoño.
4. Katherine Moyano por Bolaños Calderón.
5. Marcelo Plaza por Villegas Uribe.
6. Matías Castro Navarro por Ocampo Ordoñez.
7. Aldo Duque y Andrés Delgado por Patiño Leiva y Patiño Lozano.

Jueces Mauricio Olave Astorga y Valeria Vega Sepúlveda.

Decisión de condena por lo cargos imputados, salvo absolución de Patiño Lozano y de Ávila Londoño, este último sólo en cuanto al delito de asociación para traficar.

En Santiago a dieciséis de marzo de dos mil veinticuatro.

Esta sala del 4º Tribunal Oral, en audiencias continuas, entre los días 22 de febrero y 8 de marzo del presente año, conoció el siguiente caso:

Acusación.

Hechos. A lo menos desde el mes de julio de 2021 Yimmy Arango Leiton, César Augusto Bolaño Calderón, Carlos Arturo Buitrago Ocampo, Francisco Alfonso Vélez Feijó, Alexis Ávila Londoño y otras personas en Colombia no formalizadas en la presente causa se asociaron con el objeto de adquirir grandes cantidades de cannabis sativa tipo Cripý en Colombia de diversos productores para luego enviarla a Chile con el objeto de venderla a diversas agrupaciones dedicadas a traficar droga en Chile. En esas circunstancias los imputados antes nombrados por medio de Carlos Buitrago Ocampo y de Alexis Ávila Londoño quienes se encontraban en Chile se contactaron con el informante encubierto denominado CH01 (cuya identidad se dispuso no registrar en ninguna diligencia de investigación) a quien le solicitaron hacer las gestiones necesarias para conseguir los medios materiales y humanos necesarios para transportar la droga desde territorio marítimo ecuatoriano hasta territorio chileno, específicamente hasta las costas de la comuna de Concón. En esas circunstancias previa designación de un grupo funcionarios policiales del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas de la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante como informantes / agentes encubiertos y la tramitación de solicitudes de cooperación penal internacional a las Fiscalías de Ecuador y del Perú se coordinó y autorizó por las Fiscalías de Chile, Ecuador y Perú la técnica de entrega vigilada internacional de droga para ser trasladada hasta las costas de la comuna de Concón, en la región de Valparaíso.

Por otra parte, Yimmy Arango Leiton, César Bolaño Calderón y Francisco Alfonso Vélez Feijó se encontraba en Colombia y entre los meses de agosto y octubre de 2021 recibiendo instrucciones de los jefes y propietarios de la droga respecto de las condiciones y términos de la entrega de un total de 3205 paquetes cada uno de ellos contenedores de cannabis sativa tipo Cripý, en adelante "paquetes de marihuana",

que tenían un peso bruto aproximado de 3.545 kilos de cannabis sativa. Además, Yimmy, por instrucción de los propietarios de la droga a ser entregada en Chile, se encargó de conseguir la embarcación de nombre "Lucecita" en que trasladaría los 3.205 paquetes de droga desde territorio colombiano hasta mar territorial del Ecuador.

Previas coordinaciones – por medio de mensajería de WhatsApp y de otro tipo de comunicaciones a distancia – entre el imputado Yimmy Arango Leiton (encargado en la organización de supervisar la carga y el transporte de la droga hasta Chile) el y el informante encubierto CH01 y de los informantes/agentes encubiertos del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas (que simularon ser pescadores dispuesto a efectuar el traslado de la droga hasta Chile por vía marítima) se acordó que los paquetes de marihuana serían entregados a estos últimos en altamar en territorio marítimo del Ecuador, lo que ocurrió el día 26 de octubre de 2021 entregando los Paquetes de marihuana la tripulación de una embarcación colombiana de nombre "Lucecita" a un grupo de informantes/agentes encubiertos que tripulaban la embarcación "Frank Junior".

Luego de recibida la droga por los informantes agentes encubiertos, se autorizó la técnica de entrega controlada internacional siendo transportada desde Ecuador a Chile por informantes/Agentes encubiertos.

Una vez llegada a Chile la droga, los informantes y/o agentes encubiertos del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas informaron a la asociación conformada por los imputados antes referidos que la droga se encontraba a su disposición en territorio chileno. Atendido lo anterior los imputados Yimmy Arango, Cesar Bolaño y Francisco Vélez – por instrucción de las personas que detentaban jefatura sobre ellos – viajaron hasta Chile para supervisar junto a Carlos Buitrago y Alexis Ávila la entrega y distribución de los paquetes de marihuana. En este contexto, por medio de comunicaciones telefónicas vía WhatsApp el grupo de imputados indicó a los informantes a/o agentes encubiertos que debían llevar a cabo dos entregas de droga en dos lugares diversos de la región Metropolitana de Santiago a dos grupos diversos de traficantes según se había instruido desde Colombia

por quienes ostentaban liderazgo en la organización, una de dichas entregas correspondía a 300 kilos y la otra entrega a 600 kilos de cannabis sativa. En forma previa, los imputados ya nombrados, indicaron a los informantes y/o agentes encubiertos, que era necesario hacer entrega de una muestra de un kilo de droga a cada uno de los destinatarios en Chile, por lo que indicaron a los agentes y/o informantes encubiertos que entregaran a Carlos Buitrago dos paquetes de cannabis sativa para ser entregados a dos grupos de traficantes en Chile. Esta entrega de droga fue llevada a cabo por medio de la técnica de entrega vigiada la que fue autorizada por el Ministerio Público y se llevó a cabo el día 18 de noviembre de 2021 en la región de Valparaíso en un lugar acondicionado como domicilio de uno de los agentes y/o informantes encubiertos, lugar en el que Carlos Buitrago recibió aproximadamente dos kilos de cannabis sativa proveniente de los paquetes de marihuana importados por la organización. Ese mismo día la asociación de imputados hizo entrega de las muestras a resultas de lo cual instruyeron a los agentes encubiertos hacer dos entregas de droga en Santiago el día 26 de noviembre de 2021, una de las entregas se debería llevar a cabo en la comuna de Cerrillos en los estacionamientos de un Supermercado y la otro en la comuna de Maipú en los estacionamientos de otro Supermercado.

En forma previa a la entrega de las dos remesas de droga instruidas por los imputados Buitrago – Bolaño – Arango – Vélez, ellos efectuaron comunicaciones vía mensajería de texto y de voz entre los imputados ya nombrados y los integrantes de la organización que en Chile iban a recibir cada uno de los cargamentos de cannabis sativa y también con los informantes y/o agentes encubiertos a fin de afinar los detalles de cada una de las entregas de droga. Además, los imputados Buitrago – Bolaño – Arango – Vélez, atendidas las instrucciones recibidas desde Colombia, se distribuyeron en dos grupos para supervigilar y verificar que las entregas de droga se llevaran a cabo de acuerdo a lo planificado e instruido. Así el día 26 de noviembre de 2021 en horas del mediodía los imputados Carlos Buitrago y Yimmy Arango fueron hasta el supermercado Líder ubicado en Avenida Américo Vespucio 2.500, Cerrillos con el objeto de controlar y verificar la entrega

de un cargamento de 300 kilos de droga. Para estos efectos se dispuso la técnica de entrega controlada con sustitución total de droga la que se encomendó a un agente encubierto quien cerca del mediodía en un vehículo de carga menor llegó hasta los estacionamientos del recinto comercial ya señalado y procedió a entregar a los imputados Jhon Wilmar Patiño Lozano, Wilmer Patiño Neira, Rafael Andrés Villegas Pulido y Daniel Llanos Rojas la carga sustituida de droga, estas personas se movilizaban en dos vehículos motorizados uno de carga patente RGYX-81 y un automóvil patente PKHB-99. Una vez recibida la presunta droga el grupo de cuatro imputados se retiró del recinto en dirección a la comuna del Bosque trayecto en el cual el automóvil se mantuvo siempre escoltando al vehículo de carga, hasta un punto en el que se detuvieron a revisar los paquetes y al percatarse que no se traba de droga se dirigieron hasta un estacionamiento de un supermercado en la comuna del El Bosque donde fueron aprehendidos por personal policial de OS 7, portando y transportando a la droga sustituta.

Por otra parte, los imputados Cesar Bolaño, Francisco Vélez y Alexis Ávila (quien conducía el vehículo en que se movilizaban los tres imputados) fueron hasta los estacionamientos de un recinto comercial ubicado en Avenida Los Pajaritos 4.500, Maipú con el objeto de controlar y verificar la entrega de un cargamento de 600 kilos de droga. Para estos efectos se dispuso la técnica de entrega controlada con sustitución total de droga la que se encomendó a un agente encubierto quien cerca del mediodía en un vehículo de carga menor llegó hasta los estacionamientos del recinto comercial ya señalado y procedió a entregar al imputado Leiber Johan Ocampo Ordoñez la carga sustituida de droga, esta persona se movilizaba en un vehículo de carga patente CRHJ-26, vehículo proporcionado por Alexis Ávila para que se llevara a cabo el transporte de la droga entregada por la organización. Este vehículo fue retirado por Alexis Ávila desde su lugar de trabajo y sin autorización de sus propietarios para facilitarlo para el traslado de droga. Una vez recibida la presunta droga Leiber Johan Ocampo Ordoñez se retiró con ella del recinto en dirección al sur de la Región Metropolitana de Santiago, hasta un sector denominado Angosturas, lugar en que al percatarse del seguimiento de la policía intentó huir en

el vehículo siendo aprehendido por personal policial de OS 7, portando y transportando la droga sustituta.

Calificación jurídica. Los hechos configuran un delito consumado de tráfico de drogas de los artículos 3 y 1 de la ley 20.000 y un delito consumado de asociación para cometer delitos de la ley 20.000, según artículo 16 de la misma ley. En tales delitos los imputados son autores del artículo 15 N°1, del Código Penal.

Circunstancias modificatorias de responsabilidad criminal. No concurren.

Penas solicitadas. Respecto de Yimmy Arango Leiton, Cesar Augusto Bolaño Calderón, Francisco Alfonso Vélez Feijó, Carlos Arturo Buitrago Ocampo y Alexis Ávila Londoño como autores de tráfico de drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, asignándoles una pena privativa de libertad de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, multa de 300 unidades tributarias, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, comiso de los instrumentos y efectos del delito de cuya incautación dan cuenta los Informes 13, 14 del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas y parte N°3 del Departamento Antidrogas OS 7 y costas.

Además, respecto de los mismos acusado antes indicados, se pide que sean condenados como autor de un delito de asociarse para cometer delitos de la ley 20.000 de acuerdo con el N°1 del artículo 16 de la Ley 20.000, imponiéndoseles una pena privativa de libertad de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y costas.

Respecto de Leiber Johan Ocampo Ordoñez, Rafael Andrés Villegas Pulido, Daniel Llanos Rojas, Wilmar Patiño Neira y Jhon Wilmer Patiño Lozano como autores de un delito de tráfico de drogas estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, se les imponga una pena privativa de libertad de 10 años y un día de presidio mayor en

su grado medio, multa de 300 unidades tributarias, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, comiso de los instrumentos y efectos del delito de cuya incautación dan cuenta los Informes 13, 14 del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas y parte N°3 del Departamento Antidrogas OS 7 y las costas de la causa.

Defensas.

Defensor penal público Matías García Muñoz por Buitrago, Arango Leiton y Llanos Rojas. Se cuestiona la diligencia de la investigación, especialmente en torno a Aldo Ibaceta, una figura cuya implicación en el caso y relación con los acusados se pasa por alto pese a entregar \$15.000 dólares a uno de sus representados. También señala irregularidades y falta de información en la investigación, lo que plantearía dudas sobre la credibilidad de la acusación. Respecto del delito de asociación, el papel que los acusados supuestamente desempeñaron en el tráfico de drogas se contradice con los actos coordinados entre los Estados de Ecuador, Chile y Perú. El conocimiento y voluntad real de los acusados para cometer el delito, su participación pudo haber sido marginal o inducida. A su juicio el Ministerio Público no podrá superar la barrera de la duda razonable.

Defensores privados Paula Orellana y Nelson Saavedra por Vélez Feijó. La defensa expresa sorpresa ante cómo el Ministerio Público presenta los hechos de acusación, considerándolos ilegales desde su inicio en Colombia, dado que Chile no produce drogas. Insta a prestar atención a las pruebas que se presentarán, cuestionando la constitución de una asociación ilícita y la implicación de las cinco personas, destacando que la evidencia debe ser irrefutable para justificar condenas severas. Los acusados podrían haber sido inducidos a cometer delitos por traficantes y agentes encubiertos, cuestionando la legitimidad de la imputación y la participación activa de los acusados en el tráfico de drogas. Critica el papel de los agentes encubiertos en todas las etapas del tráfico, desde la adquisición hasta el transporte de la droga.

Defensor privado Javier Cruz Barría por Ávila Londoño.

Destacó la situación de Alexis Ávila, quien, a diferencia de otros acusados, lleva más de 12 años viviendo de manera regular en Chile, con una familia y una vida establecida. El verdadero punto de inflexión en el caso es el contacto con informantes y agentes encubiertos, argumentando que este método investigativo puede vulnerar garantías fundamentales y que necesita un control estricto para evitar el delito provocado. Señala que contrasta también la imputación en contra de Ávila con la situación de Aldo Ibaceta quien aparece en la investigación realizando acciones clave, pero sin mayor seguimiento o cuestionamiento por parte de las autoridades. Ese enfoque sugiere un posible sesgo en la investigación, que prioriza ciertas actividades mientras ignora otras que podrían ser más relevantes. Finalmente, indicó que los actos de los acusados podrían haber sido inducidos o facilitados por otros, cuestionando así la responsabilidad directa de su defendido en los hechos. Solicitando la absolución porque no existía evidencia sólida de su participación en los delitos, resaltando ilegalidades en el proceso investigativo.

Defensora privada Katherine Moyano por Bolaños Calderón.

El Ministerio Público no podrá demostrar la culpabilidad de su defendido por varias razones, incluyendo infracciones a las normas de cómo debe realizarse una investigación. Bolaños no tuvo contacto con la droga objeto del juicio ni con los coimputados, y que se vio involucrado en el caso a través de una oferta de un agente encubierto. Agentes que en realidad orquestaron el tráfico de drogas, cuestionando la existencia de agravantes o la calidad de autor en el delito de asociación para el tráfico ilícito de estupefacientes. Aunque se trate de un caso con una cantidad significativa de droga, el Ministerio Público utiliza esto como una estrategia para convencer al tribunal a pesar de las infracciones cometidas durante la investigación. El caso podría ser un precedente importante para la jurisprudencia chilena.

Defensor privado Marcelo Plaza por Villegas Uribe. Se plantea únicamente la colaboración como forma de configurar una circunstancia atenuante.

Defensor privado Matías Castro Navarro por Ocampo Ordoñez. Durante el juicio se evidenciará cómo se desarrolló la investigación iniciada por una supuesta información recibida por el Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas, relacionada con una operación en Colombia. El plan para introducir drogas en Chile fue concebido y ejecutado principalmente por agentes encubiertos, incluyendo a aquellos de Chile, Ecuador y Perú, quienes excedieron sus facultades al dominar completamente la operación, desde la recepción de la droga por una embarcación pesquera peruana operada por agentes encubiertos. Hay una figura clave, Aldo Ibaceta, quien entregó dinero para los gastos de traslado de la droga, pero que ni siquiera ha sido llamado a testificar. Hubo una instigación y un delito provocado por los agentes encubiertos, excediendo su rol de simplemente identificar a los participantes y recoger información, esto constituye una violación al debido proceso y plantea la absolución de su representado debido a estas circunstancias. En subsidio solicita que se reconozca la colaboración sustancial de su representado, quien proporcionó información durante la etapa investigativa, incluyendo detalles sobre el vehículo utilizado para el traslado de la droga.

Defensores privados Aldo Duque y Andrés Delgado por Patiño Leiva y Patiño Lozano. Señaló que se estaba en presencia de un delito de tráfico de drogas respecto a sus representados del artículo 3º de la ley 20.000. Desplegaron conscientemente la actividad descrita y sancionada en el artículo 3º de la ley 20.000 y son culpables del delito de tráfico. Se intentará generar convicción en el tribunal de que ambos encartados les corresponde la minorante del artículo 11 N°9 del Código Penal.

Declaración de los imputados.

Buitrago Ocampo.

Mi nombre es Carlos Arturo Buitrago Campo, tengo 61 años y soy de nacionalidad colombiana. A diferencia de lo que muchos podrían pensar por mi situación actual, vengo de una familia con larga vida; mis padres aún viven, con mi padre a sus 82 años y mi madre a sus 80. Tengo una hija de 35 años y un nieto de 2. Mis tres hermanos y yo compartimos la pasión por el ramo textil, que es mi profesión.

Este capítulo de mi vida, del que voy a hablar hoy, comenzó en 2021, en medio de la difícil situación global provocada por la pandemia del COVID-19. En ese entonces, me encontré en una situación económica complicada debido al cierre de la empresa donde trabajaba, resultado directo de la pandemia y las cuarentenas. Estaba en Cali, Colombia, lidiando no solo con mi desempleo sino también con el cáncer que padecía mi pareja desde marzo de ese año.

Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Edgar Franco Escobar, conocido mío, me ofreció una salida: un trabajo en Chile. Me explicó que tenía contactos dentro del gobierno, específicamente un ciudadano ecuatoriano y uno chileno. Aunque al principio dudé, ya que nunca había participado en algo así, la necesidad me llevó a aceptar su propuesta unos meses después, especialmente considerando mi edad y las pocas oportunidades de empleo disponibles para alguien mayor de 50 años.

El viaje a Chile fue organizado meticulosamente, incluyendo un desvío por Bolivia debido a las restricciones de la pandemia. Una vez en Santiago, fui alojado primero en un hotel y luego en un apartamento, con todos los gastos cubiertos por Oscar Marchant, quien, junto a Willy, fue presentado como mi contacto en Chile. Durante una reunión, Aldo Ibaceta me entregó 14 millones de pesos chilenos, los cuales entregué a Marchant para cubrir los gastos operativos del trabajo que íbamos a realizar.

En noviembre de 2021 llegaron a Chile otras personas relacionadas con nuestra operación. Se suponía que yo recibiría un pago de cuatro millones de pesos chilenos por mi participación. Sin embargo, todas mis acciones fueron dirigidas por Edgar y Oscar, sin tener conocimiento directo o contacto con la droga, excepto por unas muestras recogidas en Valparaíso bajo sus instrucciones.

Finalmente, fui detenido sin haber visto realmente la droga, excepto por las muestras mencionadas. Mis actividades siempre estuvieron bajo las directrices de Edgar y Oscar, y nunca conocí personalmente a otros implicados en el caso.

Vélez Feijó.

Me llamo Francisco Alfonso Vélez Feijó, ciudadano colombiano de 53 años, casado desde hace 25 años y padre de tres hijos universitarios. Soy propietario de un bar-restaurant en Cali, que fundé en 2016 y tuvo éxito hasta la pandemia, que nos obligó a cerrar. La crisis me dejó endeudado y desesperado por financiar la educación de mis hijos.

En medio de esta situación, César Bolaños, un amigo, y yo fuimos abordados por Edgar, un conocido que nos propuso venir a Chile para supervisar entregas de droga, asegurándonos que todo sería seguro ya que estaba manejado por la policía. Inicialmente rechazamos la oferta, pero ante la creciente desesperación económica, reconsideramos y aceptamos, motivados por la promesa de un pago que aliviaría nuestras finanzas.

Viajamos a Chile con un itinerario que comenzó en Cali y pasó por Panamá y Lima, debido a las restricciones de viaje directo a Santiago. Llegamos a Perú, desde donde cruzamos a Bolivia y finalmente ingresamos a Chile de manera ilegal. Nos recibieron en Santiago y nos llevaron a un apartamento donde conocimos a Carlos Buitrago. Más tarde, Alexis nos facilitó una van para realizar la entrega de droga, un contacto local que también nos había mostrado la ciudad.

La entrega se programó para el 26 de noviembre en un centro comercial. Aunque inicialmente se nos exigió un pago de \$40,000 para liberar la droga, esa condición se levantó, permitiendo que la operación continuara sin ese desembolso. La noche antes de la entrega, contactamos a Ávila para que nos transportara al lugar, pero fuimos detenidos por la policía en el trayecto.

Fui impulsado por la necesidad económica, actuando bajo las instrucciones de Edgar y sin tener conocimiento previo o directo con la droga, excepto en su entrega final. Nunca tuve contacto con figuras clave mencionadas por la policía y mi participación se limitó a seguir instrucciones, creyendo en la seguridad de la operación debido a las supuestas conexiones gubernamentales de Edgar.

Bolaño Calderón.

Me llamo César Augusto Bolaño Calderón, tengo 48 años, y llevo 17 años casado con Paula Andrea Calderón Ibarra. Somos padres de dos hijos, uno de 10 y otro de 15 años. Nunca he tenido problemas con la

ley y siempre he trabajado duro. Soy comerciante, me dedicaba a la compra y venta de carros usados, pero la pandemia afectó gravemente mi negocio.

Mi amigo Francisco y yo nos vimos muy afectados por la situación económica después de la pandemia y el estallido social en Colombia. Un día, mientras visitaba a Francisco en su restaurante, un conocido suyo, Edgar, nos ofreció trabajar supervisando una entrega en Chile. A pesar de nuestras dudas iniciales debido a la ilegalidad de la tarea, la desesperación por nuestras situaciones financieras nos hizo aceptar.

Nos pagarían seis millones de pesos chilenos por el trabajo, lo que equivalía a unos treinta millones de pesos colombianos. Aunque no era una fortuna, nos ayudaría a aliviar nuestras deudas. Viajamos a Chile con un itinerario complicado para evitar las restricciones de entrada al país. Al llegar, Edgar nos aseguró que una persona conocida como "el sargento", un policía, se encargaría de nosotros en Chile.

Nuestro viaje incluyó pasar por Perú y Bolivia antes de entrar ilegalmente a Chile. En Santiago, un conocido de Francisco, Alexis Ávila, nos ayudó con el transporte. También se nos encargó conseguir una furgoneta para la operación, lo cual hicimos a través de Alexis.

El día antes de nuestra detención participamos en una reunión con el sargento y otros involucrados donde se discutieron detalles de la entrega. Al día siguiente fuimos a supervisar la entrega en un centro comercial, pero nunca vimos la transacción completarse antes de ser detenidos por la policía.

Ávila Londoño.

Me llamo Alexis Ávila Londoño y llevo doce años viviendo en Santiago de Chile. Durante este tiempo, he trabajado en diversos rubros, incluyendo seguridad y coordinación de eventos. Gracias a mi esfuerzo, logré establecerme como contratista y trabajar para Matías Vargas, dueño de Garber Shop, donde me convertí en su mano derecha.

Mi conexión con este caso comienza cuando un amigo de Colombia, Fernando, me contacta para ayudar a unas personas que llegarían a Chile. Se trataba de Francisco y César, a quienes se suponía debía mostrarles la ciudad. A pesar de mi apretada agenda, accedí a ayudarlos en lo que pudieran necesitar.

Francisco me solicitó encontrar una furgoneta para alquilar. Por coincidencia, recordé una furgoneta en la empresa que necesitaba reparaciones menores. Decidí arreglarla y alquilársela, pensando en ganar algo de dinero extra. Después de repararla, se la entregué a Francisco en un taller mecánico.

El día antes de mi detención, me pidieron ayuda nuevamente, esta vez para realizar unas compras. A pesar de mi reticencia inicial debido a compromisos laborales, accedí. Sin embargo, el día de la supuesta ayuda, terminé detenido por la policía mientras esperaba en el vehículo con Francisco y César.

Esta situación me ha causado numerosos problemas, perdiendo un vehículo pagado en cuotas y enfrentándome a dificultades legales por un caso de tráfico en el que nunca quise estar involucrado. Nunca tuve intención de participar en actividades ilegales y mucho menos de conocer a las personas implicadas en este caso.

Ocampo Ordóñez.

Mi nombre es Leyber Campo Ordóñez, llegué a Chile el 28 de octubre de 2019, justo cuando estaba ocurriendo el estallido social, y me alojé con unos amigos en Quilicura. Durante esa época, comencé a trabajar conduciendo para aplicaciones de transporte como BIC, ofreciendo viajes principalmente de Quilicura a Santiago Centro.

En 2021, conocí a una persona llamada Luis, a quien regularmente transportaba desde su domicilio en Quilicura hasta un apartamento en Nataniel Cox, en Santiago Centro. Luis era un hombre de piel morena, 1.70 cm de altura y de contextura gruesa. Nos hicimos conocidos hasta el punto de intercambiar números de teléfono debido a la frecuencia de los viajes.

Hacia mediados de noviembre de ese año, Luis me propuso realizar un transporte para él, insinuando que se trataba de algo ilegal. Dada mi situación económica y la necesidad de ingresos, acepté la propuesta por un pago de tres millones de pesos. El 25 de noviembre, Luis me instruyó para recoger una furgoneta en Pudahuel Norte por la tarde, la cual luego llevé a su casa en Quilicura, siguiendo sus instrucciones para el transporte que se realizaría al día siguiente.

El 26 de noviembre seguí las indicaciones de Luis para recoger la furgoneta en Quilicura y me dirigió a Maipú, donde me estacioné en el Sodimac esperando más instrucciones. Después de un rato, al notar una atmósfera sospechosa y sentirme inseguro por la presencia de personas desconocidas, decidí no realizar la carga en ese lugar y comuniqué mis preocupaciones a Luis a través de un mensaje de voz.

Luis me indicó entonces que me dirigiera a otro estacionamiento cercano, donde un hombre chileno con cabello largo me pasó unos sacos para que los cargara en la furgoneta. Después de cargar rápidamente los sacos, seguí instrucciones para dirigirme a Santiago Centro, donde recibiría más indicaciones.

Mientras me acercaba Luis me llamó para preguntar sobre mi ubicación y me advirtió sobre la posibilidad de estar siendo seguido. Efectivamente, noté que una motocicleta me estaba siguiendo. Confundido y sin saber qué hacer, tomé la decisión de desviarme hacia Angostura, donde finalmente fui detenido por la policía.

Patiño Neira.

Mi nombre es Wilmer Patiño mi historia comienza en Cali, Colombia, donde administro unos talleres de motos y trabajo con caballos. Debido a mi negocio, conocí a dos individuos, John Freddy Camacho y Marco Antonio Meneses, quienes, al enterarse de mi viaje a Chile para adquirir alimento para caballos y establecer un negocio, me propusieron encargarme del transporte de una carga ilegal dentro de Chile. A pesar de no tener conexiones en el país, y motivado por la necesidad económica, acepté su oferta, la cual incluía cubrir todos mis gastos.

Llegué a Chile legalmente el 2 de noviembre. Una vez aquí intenté contactarme con un conocido de la industria ecuestre, quien me derivó a Daniel Llanos para obtener transporte y alojamiento. Llanos me asistió eficientemente en estas gestiones y también me ayudó con la cotización para el transporte de alimento para caballos de Chile a Colombia.

Durante mi estancia en Chile, tuve la oportunidad de reunirme con mi hijo, quien reside aquí con su familia. Aunque disfrutamos de varios encuentros familiares, mi implicación en la operación ilegal lo expuso a él y a su familia a un grave peligro. Esta decisión me ha costado muy

caro, no solo poniendo mi vida en riesgo dentro de la prisión, donde hay una recompensa por mi muerte, porque conozco los nombres de quienes debían recibir la droga, sino también afectando a mi hijo, quien fue víctima de un intento de asesinato.

La operación consistía en recibir y transportar la droga dentro de Chile, con la entrega final a una persona apodada "El Negro". Sin embargo, antes de que pudiéramos completar la entrega, fuimos detenidos por las autoridades.

Patiño Lozano.

Mi nombre es John Wilmer Patiño Lozano, tengo 25 años y vengo de Puerto Natales, donde me dedico al trabajo de jornal, específicamente en una mueblería como maestro. Desafortunadamente, enfrenté problemas con mi empleo ya que no me pagaron las imposiciones, lo que complicó mi situación legal en Chile, pues estaba con visa de trabajo.

En noviembre, mi padre, con quien no tengo una buena relación, se puso en contacto con mi madre para pedir hablar conmigo. Me informó que había llegado a Chile hacía 15 días y quería verme a mí y a mi hijo. Así que mi familia y yo viajamos a Santiago el 20 de noviembre, alojándonos en un apartamento en el centro de la ciudad. Durante esa semana, salimos con mi hijo, mi pareja y mi padre a realizar compras y comer fuera.

La mañana del incidente mi padre me pidió que lo acompañara a entregar un auto. Después de dejar a mi familia en el apartamento, nos dirigimos a un centro comercial, donde se suponía que entregaríamos el vehículo. Allí viajábamos mi padre, Rafael y yo, el otro era conducido por Daniel. Me bajé a comprar algo de comer y esperar a mi padre. Una vez que regresé al auto, junto con mi padre y otra persona, salimos y en el trayecto Daniel se bajó a montar 2 sacos en el auto en que yo iba. Llegamos a otro centro comercial. Allí, sin siquiera bajarme del vehículo, fuimos rodeados por agentes de policía y arrestados. En ningún momento tuve conocimiento de lo que se estaba transportando; simplemente acompañaba a mi padre.

Se me hizo evidente que estábamos involucrados en algo ilegal cuando vi pasar paquetes sospechosos entre los vehículos. Sin embargo,

mi participación se limitó a acompañar a mi padre en estas entregas, sin saber exactamente en qué consistía la operación.

Llanos Rojas.

Mi nombre es Daniel Llanos Rojas, llegué a Chile en 2014 buscando nuevas oportunidades. He trabajado en diversos oficios, desde atender en gasolineras hasta emprender vendiendo mojitos en el centro de Santiago, algo por lo que me hice conocido en el barrio Meiggs. Mi vida dio un giro inesperado cuando Robinson Naranjo Cubillos, un viejo conocido de Colombia, me contactó desde Copiapó. Me explicó que un amigo suyo, Wilmer Patiño, necesitaba ayuda para establecerse en Chile, buscando un auto y un departamento. Motivado por la promesa de futuros negocios legítimos, como importar alimentos para caballos finos y frutas colombianas, accedí a ayudar.

Sin embargo, la situación se complicó rápidamente. Wilmar, tras agradecerme por el favor, me involucró en el transporte de marihuana. A pesar de mis reservas, la ilusión de un negocio rentable y el miedo a las consecuencias de rechazar el plan me llevaron a aceptar. Siguiendo instrucciones detalladas, me encontré en un estacionamiento recibiendo 12 sacos de lo que se suponía era marihuana de un furgón gris. Todo el proceso me llenó de temor, especialmente al interactuar con los desconocidos que me entregaron la carga.

El plan culminó conmigo dirigiéndome a entregar la mercancía, un proceso durante el cual fui interceptado por la policía.

Villegas Pulido.

Soy Rafael Andrés Villegas Pulido, de 43 años, dedicado al negocio textil en Cali y Bogotá. Llegué a Santiago el 5 de noviembre de 2021 para explorar oportunidades de negocio. Después de instalarme, Wilmer Patiño, un amigo con quien he compartido dos años, me contactó para reunirme. En un encuentro familiar, me explicó sobre un proyecto y solicitó mi ayuda para conseguir un vehículo grande por el cual me ofreció dos millones de pesos. Acepté, interesado en el ingreso adicional. El 23 confirmé que había conseguido el vehículo y al día siguiente, se acordó su entrega a Daniel Llanos, a quien debía pasar el carro según las instrucciones de Wilmar.

El 26 conduje el vehículo hasta donde Daniel, presentado por Wilmar, y de ahí seguimos a un destino desconocido. Tras varias indicaciones, llegamos a un supermercado donde Daniel se quedó con el vehículo. Wilmar, en un coche rojo, me indicó alejarme, ya que lo transportado era marihuana y no quería implicarme. Me retiré, y tras un rato, Wilmar me recogió. Continuamos siguiendo a la camioneta blanca que yo había proporcionado, hasta que Daniel, desde ella, transfirió sacos al coche rojo. Proseguimos hasta un centro comercial, donde finalmente fuimos detenidos por la policía.

Mi rol fue específicamente conseguir el vehículo para Wilmar, quien prometió remunerarme. A pesar de desconocer los detalles de la operación inicialmente, me vi involucrado en el transporte de drogas, situación que me tomó por sorpresa y me dejó en estado de shock. Esta experiencia me enfrenta a un escenario totalmente ajeno a mi vida y carrera profesional.

Arango Leiton decidió guardar silencio.

Considerando.

Primero. Que la prueba de cargo rendida consistió en la siguiente:

A) Testigos

1. Eduardo Jara Arismendi, oficial DIPOLMAR, Armada de Chile.
2. Pedro Almonacid Soto, sargento de la Armada.
3. Luis Araya Navea, sargento de la Armada.
4. Félix Heredia Contreras, sargento de la Armada.
5. Rodrigo Gamboa Urra, capitán OS7 de Carabineros.
6. Víctor Ferrada Villarroel, sargento 1º de OS7 Carabineros.
7. AR3.
8. AR1.
9. María Fernanda Vergara Canales, cabo de OS7 Carabineros.
10. Cecilia Oyarzo Álvarez, cabo OS7 Carabineros.
11. Jorge Carrasco Torres, capitán OS7 Carabineros.
12. Leslie Bravo Farías, sargento OS7 Carabineros.
13. Constanza Rivera Pincheira, teniente OS7 Carabineros.
14. Jorge Barrientos Blanco, teniente OS7 Carabineros.

15. Gabriel Aburto Villagrán, cabo DIPOLMAR, Armada.

B) Documentos

1. Oficio Reservado N°6853/97 de 26 de noviembre de 2021 del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas de Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante.

2. Comprobantes de recaudación y de pago relativo a RUE 4150132-4. Por USD 101

3. Comprobantes de recaudación y de pago relativo a RUE 4150141-3. Por \$1.403.680

4. Comprobantes de recaudación y de pago relativo a RUE 4150142-1. Por \$32.120

5. Comprobantes de recaudación y de pago relativo a RUE 4150134-0. Por \$19.000

6. Comprobantes de recaudación y de pago relativo a RUE 4150139-1. Por \$38.000

7. Comprobantes de recaudación y de pago relativo a RUE 4150136-7. Por \$35.000

8. Comprobantes de recaudación y de pago relativo a RUE 4150140-5. Por \$51.000

9. Comprobantes de recaudación y de pago relativo a RUE 4150137-5. Por \$950

10. Comprobantes de recaudación y de pago relativo a RUE 4150135-9. Por \$100.000

11. Comprobantes de recaudación y de pago relativo a RUE 4150138-3. Por \$420.000

12. Comprobantes de recaudación y de pago relativo a RUE 4150133-2. Por \$1.265.000

13. Reportes de consulta de extranjero número 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503 y 1504 todos de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana de fecha 26 de noviembre de 2021 suscritos por Katherine Bravo Barrera. Situación migratoria.

14. Carta de fecha 01 de septiembre de 2021 de Banco BICE, que remite disco compacto con archivos de video. Identidad de Aldo Ibaceta.

15. Copia de boleta Wester Union N°9756209529.

16. Copia de boleta no afecta o exenta electrónica N°843416.
 17. Copia de boleta electrónica N°8977523.
 18. Copia de boleta Wester Union N°0027425249.
 19. Copia de boleta no afecta o exenta electrónica N°843503.
 20. Copia de boleta electrónica N°8977613.
 21. Copia de boleta de depósito N°GD-2390458.
 22. Acta de Recepción Detallada N°2014, de 09 de diciembre de 2021.
 23. Oficio Reservado N°2730, de 23 de diciembre de 2021, ambos del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio e Informe de Estupefaciente N°1.468-2021, de fecha 20 de diciembre de 2021.
 24. Acta de Entrega de Bienes Delictivos, Prueba de Campo y Pesaje, de 03 de noviembre de 2021.
 25. Acta de Recepción de Droga Para Traslado en Procedimiento de Entrega Controlada y Vigilada del Departamento Antidrogas OS7, de fecha 12 de noviembre de 2021.
 26. Acta de Recepción de Entrega Vigilada, Verificación, Apertura, Prueba de Campo, Embalaje de Drogas, Pesaje y Traslado de Drogas de 29 de octubre de 2021 ofrecidos por el Ministerio Público.
- C) Otros Medios.
1. 1362 imágenes de las evidencias incautadas y de las imágenes, tablas y cuadros contenidos en los Informes número 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas, Oficios 2334, 2914, 1774 y Parte N°3 todos del Departamento Antidrogas OS 7 y Oficios 244 y 245 del SEBV.
 2. 01 CD respaldo Banco BICE fecha 20.07.2021. NUE 5818697.
 3. 01 CD respaldo Vigilancia y Seguimiento Operativo fecha 20.07.2021. NUE 5818528.
 4. Un pendrive contenedor de archivos de audio, imágenes, videos, textos y datos de la investigación. NUE 5914387.
 5. Un teléfono celular marca Samsung. NUE 5805437.
 6. Un teléfono celular marca Samsung y un teléfono celular marca LG. NUE 5808439.
 7. Un teléfono celular marca Iphone. NUE 5808977.

8. Un teléfono marca Apple y un teléfono marca Samsung. NUE 5808980.

9. Un teléfono marca Samsung. NUE 6646992.

10. Un teléfono marca Huawei. NUE 5808976.

11. 01 Disco compacto contenedor de imágenes respaldo diligencia operativa. NUE 6646990.

12. 01 disco compacto contenedor de imágenes respaldo cámaras seguridad 25.11.2021. NUE 6646941.

Segundo. Que no se presentó prueba de descargo independiente a la rendida por el Ministerio Público.

Tercero. Que los medios de prueba señalados conformaron un conjunto coherente e independiente de fuentes de información que puede calificarse de calidad porque permiten reconstruir cronológicamente los acontecimientos iniciados a partir de julio de 2021, cuando el Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas de la Armada de Chile (DIPOLMAR), -que según el capitán de corveta Eduardo Jara Arismendi, tiene como principal misión las investigaciones relacionadas a hechos delictivos en el área marítima y portuaria- recibió el dato de un informante ecuatoriano que una organización criminal pretendía enviar un gran volumen de marihuana utilizando la vía marítima a nuestro país. La noticia, según el oficial, era confiable porque provenía de un sujeto reclutado previamente y que también trabajaba con la DEA (Agencia Federal de Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos de América). Por esta razón procedieron a denunciar ante la Fiscalía Local de Valparaíso, obteniendo así una orden de investigar el 8 de julio del año 2021.

El informante se dedicaba a la actividad pesquera y en adelante sería conocido por los involucrados en la operación como "Willy". En efecto, este sujeto habría sido contactado por un sujeto colombiano de nombre Carlos Buitrago apodado "Papaya". A través suyo, otro colombiano de apodo "Babalao", pretendía trasladar 3500 kilos de marihuana desde territorio marítimo ecuatoriano a las costas de Chile. Willy indicó que no podía hacer ese trabajo, pero recomendó a otro sujeto, un informante de la DEA también reclutado por DIPOLMAR, conocido como "Oscar Marchant" quien supuestamente poseía los

contactos y la logística suficientes para realizar el transporte. Willy se limitó a acompañar a Buitrago en su ingreso a territorio nacional a través de Colchane, frontera con Bolivia, desde allí fueron trasladados por dos agentes encubiertos (Pedro Almonacid Soto y Luis Araya Navea, testigos que ratificaron esa participación) hasta la ciudad de Santiago el 15 de julio de 2021.

Con esta información, el oficial Jara en coordinación con la fiscalía, organizó una operación policiaca internacional que en principio involucró a sus pares de Ecuador y Perú (por donde debía transitar la droga), para mediante la técnica de investigación de entrega vigilada, individualizar y detener a los sujetos que pretendían importar la droga y a las bandas nacionales receptoras. La estrecha relación entre los organismos sudamericanos encargados del control de estos ilícitos permitió identificar que la marihuana tenía como origen Colombia, en donde se investigaba a un grupo de sujetos encabezados por un tal “Babalao” que había recolectado marihuana tipo “cripy” de diversos productores y que desde la zona de los manglares trasladaría en una lancha un gran volumen con destino Chile. En esa organización también participaban Yimmy Arango Leiton, Francisco Vélez Feijó y Carlos Bolaño Calderón - según señalara Gabriel Aburto Villagrán, agente “diligenciador” (operativo con conocimiento acabado de la investigación) de DIPOLMAR que acreditó información de la policía colombiana exhibida como otros medios de prueba del auto de apertura (OM 7, organigrama de la organización y fichas).

Las defensas, en su mayoría, cifran a partir de este punto sus dudas sobre la actuación de la persecución estatal. Su hipótesis consiste en que la policía tenía el control de toda la operación, por lo que se habría inducido el delito a través de estos informantes, lo que fue creciendo en la medida que se involucraron a organismos gubernamentales que facilitaron y supervisaron el transporte de la droga, además de proporcionar una serie de medios logísticos y permitir en alguna medida su financiamiento y distribución en el país sin que los imputados tuvieran un real acceso y control sobre el objeto ilícito. En el considerando que abarca la calificación jurídica de los hechos.

La persecución nacional planificó la autorización de las técnicas especiales de investigación de entrega vigilada y controlada de drogas, puesto que con la información recabada presumían fundadamente que con su utilización se facilitará la individualización de otros partícipes de los delitos de la ley N°20.000 en el país (receptores de la droga) o en el extranjero (productores y financistas). Además les permitiría conocer sus planes y evitar el uso ilícito de las especies y recabar evidencias de los ilícitos.

Se utilizaron además agentes encubiertos (miembros de DIPOLMAR y del Departamento anti drogas OS 7 de Carabineros), para asumir el rol de transportistas de la droga desde el Ecuador hasta suelo nacional simulando que la tarea se haría por vía marítima. En coordinación con Perú, una embarcación de ese país de nombre "Frank Junior" llegó a fines de octubre al límite entre Colombia y Ecuador para recibir de la lancha colombiana "Lucesita" 3.558 kilos de marihuana tipo "cripy" dispuesta en embalajes tipo ladrillo en 125 sacos, de acuerdo a la autoridad del país del Guayas. La carga por motivos de seguridad fue llevada por tierra y vigilada luego por la agencia peruana que entregó en la frontera chilena, paso Chacalluta, 3546 kilos a DIPOLMAR auxiliada por el OS7 para ser almacenada en una bodega en el puerto de Valparaíso.

La Trazabilidad de estos acontecimientos y entidad del tráfico inicia con las imágenes de la carga de la droga desde una pequeña embarcación a otra en los manglares datada en la grabación con una voz que menciona la reciente captura de un conocido traficante colombiano en octubre de ese año, video que fue encontrado en la mensajería de WhatsApp entre Arango y Buitrago, conforme al análisis de los teléfonos incautados. Luego, el encuentro ente las naves en alta mar fue registrado en breves imágenes por los tripulantes de la embarcación peruana y ratificados por la comunicación entre el encargado del transporte y Babalao extraída desde el teléfono de Buitrago.

Carlos Buitrago Ocampo entregó al informante Oscar Marchant el equivalente a 15 mil dólares que recibió de Babalao, en gran parte, a través de una remesa en efectivo de pesos chilenos que un tercer sujeto

de nombre Aldo Ibaceta puso en su poder el 20 de julio de 2021 en un café de la comuna de Las Condes. En esa cita además participó el agente encubierto Félix Heredia Contreras, quien declaró en estrados en tal sentido. Dicha reunión fue vigilada y registrada por la policía, según se da cuenta en OM 7. La cita además se corroboró con el registro de las cámaras de seguridad de una sucursal bancaria desde donde Ibaceta retiró el dinero minutos antes, información ratificada por la institución financiera, según la documental; por los mensajes entre Ibaceta y Buitrago obtenidos desde el teléfono incautado a éste que incluyen la fotografía de un billete de mil pesos que tiene anotada la fecha 20-07-21 15'000 y una media firma. Ese dinero tenía como destino pagar la logística del traslado marítimo, por lo que explicó el capitán Jara y el cabo Aburto quienes encabezaban las pesquisas desde DIPOLMAR.

Ese dinero en parte se empleó para preparar una fachada, pues se pensó en cambiar la modalidad a un traslado a través de un container con importación frutícola de lo que finalmente desistieron. La documentación respectiva que respalda ese gasto fue incorporada como documental. Fue así como a comienzo de noviembre se dio la noticia de que la droga ya estaba en Chile. Buitrago mantenía una especie de contabilidad de los gastos y ganancias en una libreta incautada en el domicilio que mantuvo el imputado en calle Carmen 187 por el equipo en donde participó el teniente del OS7 Jorge Barrientos Blanco el día de la detención del grupo que fue incorporada en fotografías como otros medios de prueba. En juicio dijo que desde su llegada y hasta noviembre sus gastos habían corrido por cuenta de Marchant, pero el trato por el departamento, el contacto con Arango, Vélez y Bolaños, así como su comunicación constante con Babalao que incluyen imágenes de una gran cantidad de dinero en billetes de 20 mil pesos chilenos en una maleta y la obtención de al menos 2 kilos de la sustancias como muestras, denotan que al menos esa parte de su versión no es creíble.

El 14 de noviembre de 2021 Yimmy Arango, Francisco Vélez y Carlos Bolaños viajan desde Colombia hasta Lima Perú para ingresar por tierra vía Colchane irregularmente al país. El viaje es registrado por el mismo Bolaños con su teléfono móvil conforme a las imágenes exhibidas. El 16 de noviembre el grupo de sujetos es trasladado a

Santiago nuevamente por los agentes encubiertos Almonacid y Araya. Llegaron al departamento que habitaba Buitrago, acontecimiento que es además vigilado y fotografiado por la policía. Allí permanecería únicamente Arango. Mientras que Vélez y Bolaños se alojaron en un hotel y luego arrendaron por tres días un departamento en calle Serrano.

El 17 de noviembre Arango y Buitrago pidieron a Marchant dos muestras de la droga, para cumplir con el requerimiento se preparó un domicilio en Valparaíso en donde se fijaron cámaras ocultas que registraron como el día siguiente (18 de noviembre), el informante, en compañía de agentes encubiertos, entregó a Buitrago en un bolso (el mismo en el cual había recibido el dinero en julio) dos ladrillos de la carga con la que regresó de inmediato a su departamento en calle Carmen, siendo registrado por las cámaras de seguridad del edificio, tanto a la salida como a su regreso con el mencionado bolso. Existen también fotografías de esos paquetes abiertos en el teléfono incautado a Vélez Feijó, según el análisis y la exhibición referida por el cabo Aburto durante su declaración.

Los días 24 y 25 de noviembre se realizaron reuniones para coordinar dos entregas de la droga, que suponían ya en su poder para el día 26. En la primera de ellas participó Yimmy Arango, Carlos Buitrago, el informante (Marchant) y un agente encubierto del OS7, que simulaba ser el transportista (testigo "AR 1"). Allí se acordó en principio entregar 600 kilos de la marihuana, que al día siguiente disminuyeron a 300, según las comunicaciones que el agente recibió por mensajería desde el teléfono con numeración colombiana que utilizaba Arango, comunicación también exhibida de otros medios de prueba.

El 25 de noviembre se reunieron Yimmy Arango, Francisco Vélez, César Bolaño, el informante Oscar Marchant y el agente encubierto del OS-7 (testigo "AR 3") en un café Juan Valdés en Avenida Providencia. El objeto fue coordinar una segunda entrega por 600 kilos para el día siguiente.

La cita fue vigilada y fotografiada por la policía y hay constancia de ella en la conversación descubierta en el teléfono de Vélez que

sostiene con Babalao (signado según Aburto aquí como Batato). (fecha 25 de noviembre de 2021)

(Batato): "Señor buen día

Place saludarlo

Ya m entero d la reunión

Como le fue

Cuándo puede seria bueno q m

regalas una llamada

xf gracias" 11:19

(Vélez): "Que más sr" 11.21

"Bien ya nos pusimos de acuerdo

para la entrega" 11:22

"Para mañana si dios quiere" 11:22

(Batato): "Ya le llamo señor" 11:23

Tú

[Bien ya nos pusimos de acuerdo para la

Entrega]

"Wi eso se" 11:23

(Vélez): "Ok" 11:23

(Batato): "Estoy von el señor oscar en línea"

11:23

El 26 de noviembre se produjeron casi en simultaneo las dos entregas en los lugares que precisaron las fuerzas policiales porque permitían dar mayor cobertura y seguridad. Previo a esta fecha culmine se deben tener presentes algunos hechos previos que permitirían su realización.

El 2 de noviembre de ese año Wilmer Patiño Neira arribó en un vuelo desde Colombia bajo el pretexto de llevar cabo negocios en el país, pero mandatado a recibir la droga para su distribución. El imputado admitió tal propósito, aunque al menos en juicio omitió la información de quienes serían los receptores finales. Para cumplir con su tarea y, a través de un tercero, tomó contacto con un coterráneo de nombre Daniel Llanos Rojas, a quien encargó algunas diligencias de la supuesta comercialización, para luego involucrarlo a cambio de una importante suma en la recepción y transporte ilícito. Para el mismo

papel habría tomado contacto con el colombiano Rafael Villegas quien había llegado al país recién el 5 de noviembre, según ambos reconocieron en sus declaraciones.

Durante este periodo tomó contacto con su hijo de nombre Jhon Wilmar Patiño Lozano, el que había emigrado al extremo sur del país (Puerto Natales), manifestándole que quería verlo para compartir con él y su familia en Santiago y que podía pagar el viaje y el alojamiento, a lo que Jhon accedió parcialmente. El diligenciador Aburto reconoció que del análisis de las comunicaciones entre ambos se estableció que Wilmar tuvo intenciones de comprarle los pasajes, pero finalmente se los adquirió su madre, aunque el hospedaje correría de su parte. Este intercambio pareció relevante para la investigación, es decir, a contrario, no hubo allí manifestación del ilícito que se estaba preparando.

Vélez a su llegada al país tomó contacto con Alexis Ávila Londoño, otro ciudadano colombiano avecindado en Chile hacía varios años, este sujeto, aparentemente acercado a Vélez por una tercera persona, se encargó de trasladarlo junto a Bolaños por la ciudad y a través de él consiguieron un vehículo tipo van que utilizaron para una de las entregas. Ávila reconoció que sin autorización de su jefatura sacó un vehículo de la empresa que estaba descompuesto para mandarlo a reparar y dárselo en arriendo a los sujetos. En esa labor y en su propio automóvil marca Kia los condujo el 26 de noviembre hasta los estacionamientos de un recinto comercial ubicado en Avenida Los Pajaritos 4.500, comuna de Maipú, en donde se haría la entrega de 600 kilos de supuesta droga.

El 25 de noviembre Leiber Ocampo Ordóñez, un conductor de aplicaciones de origen colombiano, habría aceptado transportar la mercancía ilegal, en un trato ofrecido por un tal Luis, por tres millones de pesos, para lo cual debía dirigirse a Pudahuel Norte a buscar el furgón que había mandado a reparar Ávila.

Las esperadas entregas se produjeron la mañana del 26 de noviembre de 2021 en los estacionamientos del supermercado Líder ubicado Avenida Américo Vespucio 2.500, comuna de Cerrillos; y

también en los estacionamientos de otra sede de la misma cadena ubicada en Avenida Los Pajaritos 4.500, comuna de Maipú.

Un gran despliegue policial en ambos lugares permitió registrar en video y fotografías la presencia de los vehículos que trasladarían la supuesta droga -sustituida horas antes por sal por instrucción de la fiscalía- y de los miembros del grupo proveedor que vigilaban a distancia la operación. Con la orden de proceder a la detención de todos los sujetos ante la eventualidad de cualquier riesgo, las fuerzas intentaron practicar seguimientos hasta los lugares de destino sin éxito.

Los imputados Jhon Wilmar Patiño Lozano, Wilmer Patiño Neira, Rafael Andrés Villegas Pulido y Daniel Llanos Rojas, con la carga sustituida de droga se movilizaron en dos vehículos motorizados en dirección a la comuna de El Bosque. En el trayecto se detuvieron para sacar dos sacos y pasarlos al vehículo menor, por lo que las agencias creyeron descubierto el ardid. Así, al llegar a los estacionamiento de un supermercado, procedieron a su inmediata detención. Momentos antes Carlos Buitrago y Yimmy Arango fueron capturados cuando se retiraban del lugar a bordo de un taxi.

Leiber Johan Ocampo Ordoñez, que conducía el vehículo de carga patente CRHJ-26 -proporcionado por Alexis Ávila-, recibió en Av. Los Pajaritos 4.500 la carga de 600 kilos de la supuesta droga y se retiró en dirección al sur de la Región Metropolitana. Percatándose de que era seguido continuó la marcha hasta Angostura de Paine en donde fue aprehendido, incautándose su teléfono destruido. Los investigados Francisco Vélez y César Bolaños fueron a su vez apresados en el automóvil que manejaba Alexis Ávila en una calle contigua al centro comercial.

Estas diligencias infructuosas -porque no consiguieron individualizar a los receptores finales sino únicamente a sus transportistas- fueron largamente expuestas por los funcionarios policiales, en particular por parte de sus ejecutores los agentes encubiertos AR 1 y AR 3; y por los también miembros del OS7 de Carabineros Ricardo Gamboa Urrea, Víctor Ferrada Villarroel, María Fernanda Vergara Canales, Jorge Carrasco Torres y Constanza Rivera Pincheira. Testimonios que fueron corroborados por las imágenes de

video y fotografías de cada paso, hasta las capturas, que permitieron incautar los aparatos telefónicos de cada uno de los detenidos y el análisis posterior de los datos allí contenidos y reflejados en el juicio como otros medios de prueba. Lo propio respecto de los documentos que refrendan la incautación y el tratamiento que se dio a las especies en dinero que fueron hayadas en poder de los imputados.

En la misma jornada se practicaron diligencias de entrada y registro en los domicilios de calle Carmen y de Serrano en donde se incautó documentación personal de los imputados y otras evidencias como la libreta en donde Buitrago tomaba notas aparentemente de costos y ganancias proyectadas. Los policías Leslie Bravo Farías y Jorge Barrientos Blanco señalaron su participación en dichos eventos.

Las alegaciones de la mayoría de las defensas no refutan la extensa prueba rendida, -salvo incidentar sobre la integridad de aquella obtenida fundamentalmente de los telefono móviles, controversia que fue rechazada en la audiencia luego de someter a prueba el incidente-; sino que más bien discutieron la lógica de la operación policial y los alcances jurídicos de su intervención, muestra de ello es que no presentaron prueba propia para refutarla.

La sustancia que se pretendía distribuir en el país, de acuerdo con las pericias rendidas, representaba aproximadamente 3500 kilos de marihuana tipo “cripy”, sustancia vegetal prohibida y de peligrosidad para la salud de la población en los términos del artículo 1º de la ley N°20.000 y de su reglamento.

Se estima que así analizados los medios rendidos, los hechos punibles contenidos en la acusación fueron largamente probados, sin perjuicio de que al menos en dos imputaciones (contra Patiño Lozano y Ávila Londoño), no se alcanzó convicción de participación en el tráfico y en la asociación para traficar respectivamente.

Cuarto. Que los hechos que en consecuencia se tuvieron por acreditados consistieron en que:

A lo menos desde el mes de julio de 2021 Yimmy Arango Leiton, César Augusto Bolaño Calderón, Carlos Arturo Buitrago Ocampo, Francisco Alfonso Vélez Feijó y otros en Colombia se asociaron con el objeto de enviar a Chile 3.500 kilos de cannabis sativa tipo “Cripy”. Con

ese fin contactaron a un transportista, que a la sazón era informante encubierto de la policía marítima de Chile, para que trasladara la droga desde territorio marítimo ecuatoriano hasta las costas chilenas.

Mediante cooperación penal internacional (Fiscalías de Ecuador, del Perú y Chile), se coordinó y autorizó esta técnica de entrega vigilada internacional de la droga en altamar, en territorio marítimo del Ecuador, el 26 de octubre de 2021, desde la embarcación colombiana de nombre "Lucecita" a la embarcación "Frank Junior". Posteriormente, las agencias de investigación trajeron esa carga desde Ecuador a Chile.

Cuando los contactos de la policía marítima chilena informaron a la organización que la droga se encontraba a su disposición en territorio nacional Yimmy Arango, Cesar Bolaño y Francisco Vélez viajaron hasta Chile para supervisar, junto a Carlos Buitrago, -quien se encontraba desde julio en Santiago-, su distribución. Instruyeron a los informantes y/o agentes encubiertos que debían realizar entregas de droga en dos lugares diversos de la región Metropolitana de Santiago.

El día 26 de noviembre de 2021, en horas del mediodía, Carlos Buitrago y Yimmy Arango fueron hasta el supermercado Líder ubicado en Avenida Américo Vespucio 2.500, comuna de Cerrillos, con el objeto de controlar y verificar un cargamento de 300 kilos de droga. Se dispuso la técnica de entrega controlada con sustitución total de la sustancia la que se encomendó a un agente encubierto. Cerca del mediodía un vehículo de carga menor llegó hasta los estacionamientos del recinto comercial y procedió a la entrega de los sacos al transporte de carga patente RGYX-81 conducido por Daniel Llanos Rojas. Al retirarse del lugar fue escoltado por un segundo automóvil patente PKHB-99 en donde viajaban Wilmer Patiño Neira, Rafael Andrés Villegas Pulido y Jhon Wilmar Patiño Lozano. Se trasladaron hasta el estacionamiento de un supermercado en la comuna de El Bosque en donde los aprehendió personal policial de OS 7, portando y transportando la droga sustituta.

Simultáneamente, César Bolaño, Francisco Vélez y Alexis Ávila (que conducía el vehículo en que se movilizaban) llegaron a los estacionamientos de un recinto comercial en Avenida Los Pajaritos N°4500, comuna de Maipú, para controlar y verificar la entrega de un cargamento de 600 kilos de droga. Para estos efectos también se

dispuso la técnica de entrega controlada con sustitución total de droga la que se encomendó a un agente encubierto, quien cerca del mediodía en un vehículo de carga menor llegó hasta el lugar señalado y procedió a entregar los sacos a Leiber Johan Ocampo Ordoñez. Esta persona se movilizaba en el vehículo patente CRHJ-26 proporcionado por Alexis Ávila. Una vez recibida la presunta droga Ocampo Ordoñez se dirigió al sur de la Región Metropolitana hasta el sector denominado Angostura en la comuna de Paine, siendo aprehendido por personal policial de OS 7, portando y transportando la droga sustituta.

Quinto. Que la calificación jurídica de estos hechos corresponde a un delito consumado de tráfico de drogas de los artículos 3 y 1 de la ley 20.000; y un delito consumado de asociación para cometer delitos de la ley 20.000, según artículo 16 de la misma ley.

En este sentido cabe mencionar que la entrega vigilada y controlada de drogas es una técnica especial de investigación criminal fue introducida por primera vez en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (Convención de Viena, de 1988), celebrada en Viena el 20 de diciembre de 1988. En su artículo 11 manadata a las Partes a adoptar las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades, para que se pueda utilizar de forma adecuada, en el plano internacional, de conformidad con acuerdos o arreglos mutuamente convenidos, con el fin de descubrir a las personas implicadas en estos delitos. Este acuerdo fue recogido en la legislación nacional en el inciso primero del artículo 23 de la Ley 20.000 y tiene como ámbito de aplicación cuando se presuma fundadamente que ella facilitará la individualización de otros partícipes, sea en el país o en el extranjero, como, asimismo, la individualización de las personas que participen en la ejecución de los delitos previstos en la Ley de Drogas, conocer sus planes, evitar el uso ilícito de las especies que pueden ser objeto de esta técnica, o sirva para prevenir y comprobar cualquiera de los delitos descritos y sancionados en dicha ley. Criterio refrenda por la Excma. Corte Suprema, en causa rol 7.876-22, del 15 de junio de 2022, según se consigna en "Ley 20.000: problemas actuales en su interpretación", Materiales docentes 44, © Lorena Rebolledo Latorre y Manuel Rodríguez Vega, por los textos, 2022 © Academia

Judicial de Chile, por esta edición, 2022. Estas circunstancias están suficientemente justificadas en este caso en concreto conforme a la prueba rendida.

El artículo 23 de la ley vigente establece también expresamente que no obstará a la consumación de los delitos que se pesquisen con ocasión de la aplicación de esta técnica de investigación, el haber sustituido las sustancias, ni el que hayan participado funcionarios, agentes encubiertos, agentes reveladores o informantes.

Finalmente, la alegación rechazada en el veredicto sobre la punibilidad de los actos a pesar de la intervención de funcionarios, agentes encubiertos e informantes en las entregas vigiladas o controladas, por mandato del mismo texto, no se considera inducción o instigación al delito.

Sexto. Que en el caso del delito consumado de asociación para cometer delitos de la ley N°20.000, artículo 16 N° 1 de la citada normativa, Carlos Arturo Buitrago Ocampo, Yimmy Arango Leiton, Francisco Alfonso Vélez Feijó y César Augusto Bolaño Calderón organizaron la internación, por vía marítima, de más de tres toneladas de marihuana a Chile. Se desplazaron desde Colombia e ingresaron para ese propósito al país a través de pasos no regulados. En territorio nacional gestionaron los medios necesarios para internarla y distribuirla. Además, coordinaron la entrega de una cantidad importante del cargamento en dos operaciones simultáneas que vigilaron y controlaron el 26 de noviembre de 2021. Es decir, se asociaron u organizaron más o menos permanente y jerarquizadamente, con un superior en Colombia para cometer un número indeterminado de delitos que significaban la distribución de la sustancia a distintos receptores a partir de noviembre en esta ciudad de Santiago de Chile. La consumación de este ilícito no depende de la ejecución de los delitos planificados. El bien jurídico tutelado es de carácter pluriofensivo: se protege el orden público y la salud.

La participación en el delito se afirmó a partir de las declaraciones de los agentes policiales que participaron de los seguimientos y técnicas investigativas autorizadas por la ley que fueron corroboradas con las fotografías y videos de las reuniones de coordinación efectuadas entre

ellos, sus comunicaciones obtenidas de sus aparatos móviles incautados y de los agentes reveladores e informantes que reportaban sus pasos y el devenir del “negocio” al menos a un sujeto presumiblemente en el extranjero. Los cuatro acusados indicados son responsables de este ilícito en calidad de autores del artículo 15 N°1 del Código Penal.

Séptimo. Que se absuelve del cargo como presunto autor de este delito de asociación para traficar que pesaba en contra del acusado Alexis Ávila Londoño. No hay pruebas que superen el estándar legal de convicción que lo sindique como partícipe de la asociación descrita anteriormente. Es efectivo que proporcionó un vehículo a Vélez, a cambio de dinero, para la realización de una de las entregas de droga y que fue detenido cuando lo acompañaba guiando su automóvil; sin embargo, no fue parte de las comunicaciones entre el grupo o con los agentes y/o informantes y tampoco fue captado en las reuniones en las que se coordinaron las entregas. Su nacionalidad no basta para imputarle tal cargo, su participación en los hechos punibles se circunscribe únicamente a facilitar los medios, -los que serán objeto de comiso-, para concretar el tráfico de drogas que se ejecutaría en Avenida Los Pajaritos N°4500, comuna de Maipú.

Octavo. Qué respecto del delito de tráfico ilícito de drogas establecido en el artículo 3 con relación al 1 de la ley N°20.000 se estableció que las sustancias vegetales prohibidas (marihuana “cripy”) fueron reunidas en Colombia, conforme a fotografías, videos, declaración de los investigadores; documental y pericial que acreditan el peso, naturaleza, embalaje y traspaso a una embarcación en territorio marítimo ecuatoriano, su paso vigilado por autoridades de ese país y luego por funcionarios del Perú hasta su arribó a suelo nacional.

La droga iba a ser puesta a disposición de distintos destinatarios, para eso se requirió a los supuestos transportistas (los informantes y agentes autorizados conforme a la ley N°20.000) qpara que realizaran dos entregas el 26 de noviembre de 2021. Ambas se concretaron bajo la vigilancia policial reflejada en cuantiosa prueba audiovisual y testimonial rendida. Para mantener la seguridad de la operación, la droga se sustituyó por sal, por lo que los receptores de 300 y 600 kilos de la

supuesta droga continuaron con el traslado hasta que fueron aprehendidos por las fuerzas policiales que los vigilaron y seguían.

En este ilícito los acusados Yimmy Arango Leiton, César Augusto Bolaño Calderón, Francisco Alfonso Vélez Feijó, Carlos Arturo Buitrago Ocampo, Alexis Ávila Londoño, Leiber Johan Ocampo Ordoñez, Rafael Andrés Villegas Pulido, Daniel Llanos Rojas y Wilmer Patiño Neira conocieron y aceptaron, custodiar, transportar y/o transferir las sustancias prohibidas. Participaron cada uno en distintas fases de ejecución del hecho hasta su puesta en territorio nacional para su distribución. Todos ellos por estas razones deberán responder como autores ejecutores conforme al artículo 15 N°1 del Código Penal.

La intervención de un tercero no imputado en este juicio -Aldo Ibaceta- que habría facilitado el dinero a nombre de Babalao para el transporte de la droga no influye en desmentir o aminorar la responsabilidad de los acusados y tampoco parece un despropósito en razón de otras indagaciones que entre líneas se puede desprender de la actuación del persecutor estatal y de la eficacia de la represión jurídica de los delitos.

Noveno. Que se absuelve del cargo como presunto autor del delito de tráfico de drogas dirigidos en contra del acusado Jhon Wilmar Patiño Lozano, porque no se probó más allá de toda duda razonable que haya conocido y aceptado la tarea de transportar o poseer droga, ni tampoco custodiar su traslado. Su presencia junto a su padre el día de la detención no es un indicio suficiente para acreditar participación en el tráfico, por lo que será absuelto. Esto, no obstante, a que el imputado en su propia declaración, avalada por su defensa, reconoció que solo poco antes de la aprehensión se percató de la naturaleza de la operación en la que se vería involucrado por su padre cuando los móviles se detuvieron a cargar un par de sacos en el auto en donde iba como pasajero.

Décimo. Que la determinación de las penas por ambos delitos responde a que los acusados tienen circunstancias atenuantes en su favor y ninguna agravante. Nueve de los diez cuentan con irreprochable conducta anterior (artículo 11 N°6 del Código Penal), según reconoce el propio Ministerio Público y de acuerdo con su comportamiento previo en

Chile y en su país de origen conforme a la documentación acompañada. Arango Leiton es el único al que no se reconocerá esa minorante, porque si bien no cuenta con condenas antes de su aprehensión, a esa fecha ya era investigado y pesaba sobre él una orden de detención por el mismo delito de tráfico en una causa en la cual posteriormente fue condenado en nuestro país.

También se reconocerá en favor de los condenados Leiber Johan Ocampo Ordoñez y Daniel Llanos Rojas la circunstancia atenuante de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos (artículo 11 N°9 del Código Penal), puesto que reconocieron su participación concreta y acotada en el tráfico, eran los conductores de los vehículos que recibirían la marihuana en cada entrega.

Rafael Andrés Villegas Pulido contó con el expreso reconocimiento del fiscal sobre su colaboración efectiva en la investigación, por lo que siguiendo el camino del sistema acusatorio imperante, el tribunal hará suya esa calificación del persecutor beneficiándole por lo tanto la atenuante.

Respecto de Alexis Ávila Londoño, también verá favorecida su situación con la misma minorante de responsabilidad, porque si bien negó que conociera la naturaleza de la operación, admitió sus contactos con Vélez Feijó a quién facilitó un vehículo de la empresa donde formalmente trabajaba, así como la utilización de su propio automóvil para trasladarlo hasta las cercanías del lugar de entrega en donde finalmente fueron aprehendidos. Su rol se asemeja, por lo tanto, a las tareas acotadas emprendidas por los otros conductores. Todos podían desempeñar esa labor ya que tenían residencia en Chile muy anterior a los hechos.

No se reconocerá la colaboración sustancial en esclarecimiento de los hechos solicitada por las defensas para César Augusto Bolaño Calderón, Francisco Alfonso Vélez Feijó, Carlos Arturo Buitrago Ocampo y Yimmy Arango Leiton, los que no esclarecieron su verdadero rol en la internación y distribución de esta gran cantidad de droga al país.

Décimo Primero. Que el tráfico de drogas conforme al artículo 3 de la ley N°20.000 tiene un rango que comienza en el presidio mayor en su grado mínimo. En el caso de los condenados Alexis Ávila Londoño,

Leiber Johan Ocampo Ordoñez, Rafael Andrés Villegas Pulido y Daniel Llanos Rojas, contando cada uno con dos circunstancias atenuantes en su favor (11 N°6 y N°9), conforme lo dispone el artículo 68 del Código Penal, se rebajará la pena en un grado, situándose en el presidio menor en su grado máximo. En tanto que para Yimmy Arango Leiton, César Augusto Bolaño Calderón, Francisco Alfonso Vélez Feijó, Carlos Arturo Buitrago Ocampo y Wilmer Patiño Neira, con una atenuante (11 N°6) la pena por este ilícito se situará en ese grado mínimo, considerándose empero la gran cantidad de droga involucrada. La multa copulativa sufrirá la correspondiente y proporcional rebaja de acuerdo a idénticos lineamientos.

Décimo Segundo. Que la asociación para traficar droga (artículo 16 N°1 con relación al 1° de la ley N°20.000), contempla una pena que comienza en el presidio mayor en su grado medio, por lo que con una circunstancia atenuante (11 N°6) los condenados Carlos Arturo Buitrago Ocampo, Yimmy Arango Leiton, César Augusto Bolaño Calderón y Francisco Alfonso Vélez Feijó, deberán responder con esa sanción.

Décimo Tercero. Que las penas privativas de libertad de presidio menor asociadas al delito de tráfico ya indicadas, serán sustituidas por libertad vigilada intensiva conforme al artículo 15 bis y siguientes de la ley N°18.216. Se tiene en cuenta para ello los antecedentes sociales y características de personalidad de los condenados, su conducta anterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito que permiten concluir que una intervención individualizada puede favorecer la reinserción social. Dichos antecedentes fueron aportados por las defensas y consistieron en informes sociales favorables y antecedentes familiares y laborales previos que dan cuenta de que Ávila Londoño, Ocampo Ordóñez, Villegas Pulido y Llanos Rojas están en condiciones de permanecer en Chile sin perpetrar otros delitos con la correspondiente supervigilancia estatal.

Décimo Cuarto. Que los abonos correspondientes de acuerdo con las medidas cautelares a la que estuvieron sujetos los acusados desde su detención, corresponden a 842 días; salvo Arango Leiton que cuenta con 560 días, conforme a la certificación correspondiente registrada en la causa.

Y visto lo dispuesto en los artículos 1, 3, 16, 23, 45 y demás pertinentes de la ley N°20.000 y de su reglamento; 1, 11 N°6, 11 N°9, 15 N°1 y 68 del Código Penal; 282 y siguientes del Código Procesal Penal; y 15 bis y siguientes de la ley N°18.216; se declara que:

1. Se absuelve a Jhon Wilmar Patiño Lozano de los cargos como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

2. Se absuelve a Alexis Ávila Londoño de los cargos como presunto autor del delito de asociación para traficar droga.

3. Se condena a Yimmy Arango Leiton, César Augusto Bolaño Calderón, Francisco Alfonso Vélez Feijó, Carlos Arturo Buitrago Ocampo, Alexis Ávila Londoño, Leiber Johan Ocampo Ordoñez, Rafael Andrés Villegas Pulido, Daniel Llanos Rojas y Wilmar Patiño Neira, como autores del delito de tráfico ilícito de drogas cometido en esta ciudad el 26 de noviembre de 2021 a las siguientes penas:

a. Yimmy Arango Leiton, César Augusto Bolaño Calderón, Francisco Alfonso Vélez Feijó, Carlos Arturo Buitrago Ocampo y Wilmer Patiño Neira, cada uno a 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 100 UTM, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

b. Alexis Ávila Londoño, Leiber Johan Ocampo Ordoñez, Rafael Andrés Villegas Pulido y Daniel Llanos Rojas, cada uno a 5 años de presidio menor en su grado máximo, multa de 10 UTM, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

4. Se sustituye la pena privativa de libertad dispuesta en contra de Ávila Londoño, Ocampo Ordóñez, Villegas Pulido y Llanos Rojas por igual tiempo de libertad vigilada intensiva con sujeción al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral bajo la aplicación de las siguientes condiciones especiales:

a. Residencia en un lugar determinado, el que podrá ser propuesto por cada condenado;

b. Sujeción a la vigilancia y orientación permanentes de un delegado por el período fijado, debiendo cumplir todas las normas de conducta y las instrucciones que aquél imparta respecto a educación, trabajo, morada, cuidado del núcleo familiar, empleo del tiempo libre y cualquiera otra que sea pertinente para una eficaz intervención individualizada;

c. Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio, bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención individual; y,

d. Obligación de mantenerse en el domicilio o lugar que se determine, durante ocho horas diarias continuas, entre las 22 y las 06 horas del día siguiente.

Por esta razón se modifica la cautelar de prisión preventiva a la que estaban sujetos actualmente Alexis Ávila Londoño, Leiber Johan Ocampo Ordoñez y Daniel Llanos Rojas, por la prohibición de salir del país (artículo 155 letra g) del Código Procesal Penal), ordenándose su libertad por esta causa.

5. Se condena a Yimmy Arango Leiton, César Augusto Bolaño Calderón, Francisco Alfonso Vélez Feijó y Carlos Arturo Buitrago Ocampo, como autores de asociarse para cometer delitos de la ley N°20.000 cometido el año 2021, cada uno a 12 años de presidio mayor en su grado medio, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

6. Se ordena el comiso de los instrumentos y efectos del delito de cuya incautación dan cuenta los Informes 13 y 14 del Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas; y parte N°3 del Departamento Antidrogas OS 7.

7. Se reconoce como abono para cumplir las penas en favor de los condenados 842 días, salvo para Arango Leiton que cuenta con 560 días.

8. Se exime del pago de las costas por encontrarse los condenados privados de su libertad durante el proceso siendo el juicio oral el principal derecho que les asiste.

9. Se ordena el levantamiento de la huella genética de los condenados para incluirla en el registro correspondiente.

10. Se ordena comunicar al Servicio Nacional de Migraciones que se dictó esta sentencia donde todos los condenados son extranjeros.

Redactó Cristián Soto G.

Dictada por la sala integrada por los jueces Mauricio Olave Astorga, Valeria Vega Sepúlveda y Cristián Soto Galdames, la segunda juez destinada a esta función y los restantes titulares de este tribunal.